Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de fecha seis de noviembre de dos mil veinticuatro.

**VISTOS** los expedientes conformados con motivo de los Recursos de Revisión **01531/INFOEM/IP/RR/2024 y 01532/INFOEM/IP/RR/2024** interpuestos por XXXXXXXXXXXXXXX en lo sucesivo Recurrente y/o Particular, en contra de las respuestas del Sujeto Obligado **Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango**, se emite la presente Resolución, con base en los Antecedentes y Considerandos que a continuación se exponen:

**A N T E C E D E N T E S**

**I. Presentación de las solicitudes de información**

El veinte de febrero de dos mil veinticuatro, el Particular presentó dos solicitudes de acceso a la información pública a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense en lo sucesivo SAIMEX, ante el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, mediante las cuales requirió lo siguiente:

**FOLIO DE SOLICITUD 00055/HRZUM/IP/2024**

**DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA**

*“Solicito los títulos de crédito o cuentas por cobrar que tenga el hospital del año 2019 en versión pública”*

**FOLIO DE SOLICITUD 00061/HRZUM/IP/2024**

**DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA**

*“Solicito saber si hay servidores públicos con títulos de crédito o adeudos con el. Hospital pendejee en enero 2024”* (Sic)

**MODALIDAD DE ENTREGA** La modalidad de entrega que escogió la Particular para que se le entregará la información en las solicitudes de acceso a la información fue a través del SAIMEX.

**II. Respuestas del Sujeto Obligado**

Con fecha ocho de marzo de dos mil veinticuatro, a través del SAIMEX, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado notificó al Particular las respuestas a sus solicitudes de acceso a la información, en las que manifestó lo siguiente:

1. **Solicitud de información 00055/HRZUM/IP/2024,** adjuntó los siguientes archivos:
   * + - ***227.pdf:***Oficio suscrito por la Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género en el que manifestó lo siguiente:

*“…*

*Derivado de los acuerdos generados en el Décima Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, y como es del conocimiento de esta Unidad Administrativa a su cargo por unanimidad de cotos de los integrantes de dicho comité, los Títulos de Crédito (pagarés)que han sido remitidos por la Dirección de Administración y Finanzas a esta Unidad Jurídica y de Igualdad de Género, los cuales se encuentran en resguardo de la misma fueron clasificados como reservados, en términos de os artículos 24 fracción VI y 91 de la Ley de Transparencia y Acceso al a Información Pública del Estado de México y Municipios.*

*…” (Sic).*

* + - * ***ACTA 18VA CON PRBS DÑO FIRMA.pdf:*** Consiste en el acuerdo de Reserva mencionado en la respuesta arriba transcrita.

1. **Solicitud de información 00061/HRZUM/IP/2024,** adjuntó el archivo de nombre ***233.pdf,*** el cual consiste en un oficio suscrito por la Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género en el que manifestó lo siguiente:

*“…*

*Atendiendo la solicitud que nos ocupa, esta Unidad Jurídica y de Igualdad de Género conforme a las funciones y atribuciones conferidas por los ordenamientos en mención, no posee, genera y/o administra información relacionada a “servidores públicos con títulos de crédito o adeudos con el hospital”, ya que únicamente esta Unidad Administrativa resguarda los títulos de crédito que son remitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, siendo la Unidad Administrativa que genera, recopila, administra, maneja y procesa la información; sin embargo, en vías de colaboración y para confirmar lo que antecede, se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable dentro de los archivos físicos y electrónicos de esta Unidad sin que se haya localizado documental alguna respecto a la solicitud de referencia.*

*…”*

**III. Interposición de los Recursos de Revisión**

Con fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, se recibieron en este Instituto, a través del SAIMEX, dos Recursos de Revisión interpuestos por la parte recurrente, en contra de las respuestas emitidas por la Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en los siguientes términos:

**Solicitud: 00055/HRZUM/IP/2024**

**Recurso de Revisión: 01531/INFOEM/IP/RR/2024**

**ACTO IMPUGNADO**

*“Sólito que me entreguen la información que están ocultando es pública y como ciudadanos tenemos derecho pero el área financiera y jurídica de ese hospital no quieren entregar la información a la que todos tenemos derechos y sino que me digan por que no puede ser entregada si es en versión pu loca no ay pretextos” (Sic)*

**RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD**

*“Porque Los directivos del hospital solo esconden la información del dinero que se roban” (Sic).*

**Solicitud: 00348/TLALNEPA/IP/2024**

**Recurso de Revisión: 02867/INFOEM/IP/RR/2024**

**ACTO IMPUGNADO**

*“Quiero que me entreguen la documentación que solicite porque el jurídico si tiene esa información y como la titular del jurídico tiene una deuda con el. Hospital pro eso se niega a entregarla” (Sic)*

**RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD**

*“Que se termine el abuso de de las autoridades porque los trabajadores pagamos los pltos rotos y solo esconden su información a la que tenemos derecho como ciudadanos” (Sic).*

**IV. Trámite de los Recursos de Revisión ante el Instituto**

**a) Turno de los Recursos de Revisión.** El veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, el SAIMEX, asignó los Recursos de Revisión con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Órgano Garante y los turnó para los efectos del artículo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a los Comisionados que integran el Pleno de este Instituto.

**b) Admisión de los Recursos de Revisión.** El veintidós de marzo y el dos de abril de dos mil veinticuatro, se acordó la admisión de los medios de impugnación**,** interpuestos por la persona Recurrente en contra de Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en términos del artículo 185, fracciones I y II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la cual fue notificada a las partes el mismo día, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en el que se les otorgó un plazo de siete días hábiles posteriores a dichas notificaciones para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y formularan alegatos.

**c) Informe Justificado.** El ocho de abril de dos mil veinticuatro, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), se recibieron en este Instituto los informes justificados por parte del Sujeto Obligado en los que realizaron las siguientes manifestaciones:

**Solicitud: 00055/HRZUM/IP/2024**

**Recurso de Revisión: 01531/INFOEM/IP/RR/2024**

* + - * ***informe just 00055.pdf*:** Suscrito por el Director de Administración y Finanzas en el que señaló lo siguiente:

“…

***PRIMERO:*** *Este Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, a través de esta persona servidora pública habilitada de la Dirección de Administración y Finanzas, quien suscribe, ratifico la respuesta inicial proporcionada a través del oficio 208C0401030000L/0134/2024, mismo que manifiesta que todos los títulos de crédito o cuentas por cobrar vencidos, son referidos a la Unidad Jurídica para dar continuidad al Proceso de pago.*

*…”*

* + - * ***55.pdf:*** Suscrito por la Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género en el que señaló

“…

***QUINTO:*** *Además que la información requisitada dentro de los títulos de crédito es documentación que contiene datos personales y/o sensibles de los usuarios de este Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, como lo son el nombre, dirección, teléfonos particulares entre otros elementos, tanto de los pacientes como de las personas a cargo del mismo, y cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste es por lo que se deduce que la divulgación de dicha información, sea parcial o total puede ocasionar un perjuicio real,*

*…”*

**Solicitud: 00061/HRZUM/IP/2024**

**Recurso de Revisión: 01532/INFOEM/IP/RR/2024**

* + - * ***SAIMEX RR-061-2024 DAF.pdf*:** Suscrito por el Director de Administración y Finanzas en el que señaló lo siguiente:

“…

***PRIMERO:*** *Este Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, a través de esta persona servidora pública habilitada de la Dirección de Administración y Finanzas, quien suscribe, ratifico la respuesta inicial proporcionada a través del oficio 208C0401030000L/0140/2024, mismo que manifiesta que la información que solicita el peticionario, tendría que ser referida a la Subdirección de Personal, debido a que es el área que cuenta con los registros de los adeudos de Servidores Públicos.*

*…” (Sic).*

* + - * ***65.pdf:*** Suscrito por la Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género en el que señaló:

“…

***TERCERO: CONFIRMAR*** *la respuesta emitida por esta servidora pública habilitada.*

***…”***

**d). Vista del Informe Justificado**. El quince de octubre de dos mil veinticuatro, se dictó acuerdo mediante el cual se puso a la vista del Particular, el Informe Justificado, el cual le fue notificado, en esa misma fecha, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX). No obstante, lo anterior, el Recurrente omitió realizar manifestación alguna que a su derecho conviniera y asistiera.

**e). Acumulación de los asuntos.** El diez de abril de dos mil veinticuatro, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, durante la Décima Segunda Sesión Ordinaria con el propósito de privilegiar la resolución expedita y evitar resoluciones contradictorias, con fundamento en el artículo 18 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, según lo previsto en su artículo 195, **acordó** la acumulación del Recurso de Revisión **01532/INFOEM/IP/RR/2024,** al diverso **01531/INFOEM/IP/RR/2024,** por ser este último el más antiguo, sustanciado bajo el índice de esta Ponencia, al advertir conexidad entre estos, ya que fueron promovidos por la misma persona, en los que se señaló como Sujeto Obligado recurrido Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y en los cuales, además, se manifestaron idénticos actos recurridos.

**f) Ampliación de plazo.** El veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, el Comisionado Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, acordó ampliar por un periodo de razonable el plazo para resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa; proveído que fue notificado a las partes mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), al día hábil siguiente.

**g) Cierre de instrucción.** El veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción y se determinó pasar los expedientes a resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 185, fracciones VI y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que fue notificado a las partes el mismo día, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo a los siguientes:

**C O N S I D E R A N D O S**

**PRIMERO**. **Competencia**

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 8°, 9°, 10, 37 y 42, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 7°, 9°, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO**. **Causales de improcedencia y sobreseimiento**

Este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente acorde con el Criterio orientador en la Tesis de Jurisprudencia “IMPROCEDENCIA.” (Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 1985, pág. 262), el cual establece que debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, sea que las partes lo soliciten o no, por ser una cuestión de orden público; de tal suerte, deberá ser desechado cualquier Recurso de Revisión que actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por ser improcedente.

En el presente caso, no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia establecidas en el ordenamiento jurídico previamente señalado, toda vez que: el recurso fue presentado dentro del plazo establecido en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por el recurrente ante otra instancia; no existió prevención alguna; la veracidad de la respuesta no formó parte del agravio; ni se realizó una consulta o ampliación a los alcances del requerimiento informativo.

**Causales de sobreseimiento.**

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que **no se actualiza ninguna de las previstas por el artículo 192 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios;** lo anterior, en virtud de que no existe constancia en el expediente en que se actúa, de que la recurrente se hubiera desistido del recurso, hubiera fallecido, que sobreviniera alguna causal de improcedencia, que el Sujeto Obligado hubiese modificado o revocado el acto impugnado, o bien que el recurso de revisión hubiera quedado sin materia. Por tales motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto.

**TERCERO. Determinación de la Controversia**

Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el Particular solicitó al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, lo siguiente:

1. Títulos de crédito o cuentas por cobrar que tenga el hospital del año dos mil diecinueve en versión pública.
2. Saber si hay servidores públicos con títulos de crédito o adeudos con el Hospital en enero de dos mil veinticuatro.

En respuesta, el Sujeto Obligado por lo que hace al primer punto señaló que la información se encontraba clasificada como reservada, y sobre el segundo manifestó que no contaba con lo solicitado derivado de ello el Particular se inconformó por la negativa de la información, así en el asunto que nos ocupa se actualiza la causal de procedencia señalada en el artículo 179, fracciones I y II, de la Ley de la materia.

Establecido lo anterior, lo consecuente es analizar el agravio manifestado por el ahora Recurrente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y demás disposiciones legales aplicables a la materia que se resuelve.

**CUARTO. Marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública**

El artículo 6°, Apartado A), fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, dispone en su artículo 70, la información que se considera corresponde a las Obligaciones de Transparencia, la cual debe estar disponible para cualquier persona de manera permanente y actualizada.

En este sentido, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, establecen los formatos para dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, así como los plazos de actualización.

En materia local, el artículo 5°, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es coincidente con la Constitución Federal, en el sentido de la publicidad de toda la información, con la única restricción de proteger el interés público, así como la información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Local), establece lo siguiente:

El artículo 12, que, quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma. El artículo 18, que, los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.

El artículo 19, que, se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.

**QUINTO. Estudio de Fondo**

Una vez determinada la vía sobre la que versará el presente Recurso y previa revisión del expediente electrónico formado en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), con motivo de la solicitud de información y del Recurso a que da origen, es conveniente analizar si la respuesta del Sujeto Obligado cumple con los requisitos y procedimientos del derecho de acceso a la información pública.

Establecido lo anterior, sobre la información solicitada, es preciso señalar que, todos los actos que realicen los sujetos obligados deben estar documentados y, bajo el más alto estándar de transparencia deberán poner toda la información que se encuentre en su posesión, a disposición de los particulares que la soliciten, resulta necesario referir que, el artículo 6° apartado A fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, guardan una estrecha relación, puesto que los ordenamientos citados concurren refiriendo que los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen, posean o administren. Por lo que se procede a analizar los puntos requeridos por el Particular

En primer término, por lo **que hace al primer punto** señalado en el Considerando **TERCERO** relacionado con los títulos de crédito o cuentas por cobrar del año dos mil diecinueve, al respecto, en un principio, resulta conveniente señalar que mediante Decreto número 59, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el ocho de agosto de dos mil siete, a través del cual la Legislatura de dicho Estado expidió la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal Denominado Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, donde en sus artículos 1, 3 fracción 1, 10 fracción VIII y 15 fracción I, párrafo segundo, literalmente se estableció:

***Artículo 1****.- Se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango como un Organismo Público Descentralizado de carácter estatal. Con personalidad jurídica y patrimonio propio."*

***Artículo 3****.- Para el cumplimiento de su objeto, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango tendrá las siguientes funciones:*

*l. Proporcionar los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y ambulatorios de lata especialidad que determinen las disposiciones aplicables, así como aquellos que autorice su Consejo interno relacionados con la salud, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios y hasta el límite de su capacidad instalada;*

*…*

*"Artículo 10.- El Consejo interno tendrá las siguientes facultades:*

*(...)*

*VIII. Fijar las bases de los mínimos y máximos de las cuotas de recuperación y su actualización, por los servicios que preste el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.*

*(...)"*

*"Artículo15.- El patrimonio del Hospital de Alta Especialidad estará constituido por:*

*l. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus atribuciones;*

*(...)*

*Los ingresos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango...*

*Los ingresos propios que obtenga el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango por concepto de cuotas, donaciones, derechos y servicios que preste, serán integrados a su patrimonio y no podrán ser contabilizados como aportaciones del Gobierno del Estatal."*

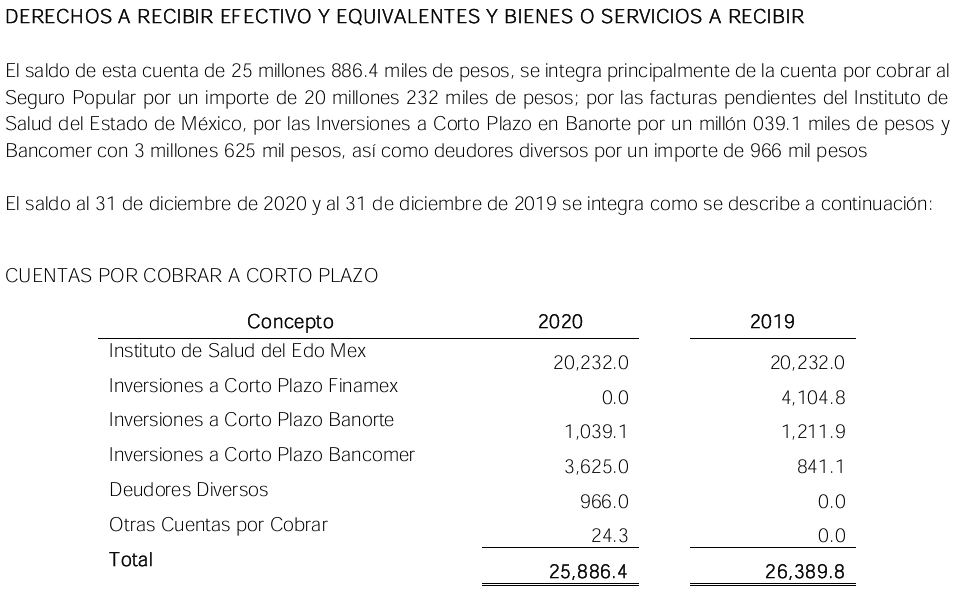
Transcripción de la que se desprende, en lo que interesa, que el legislador local a través del Decreto 59 de mérito, determinó que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, tendría personalidad jurídica y patrimonio propio y, que éste último estaría constituido por los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus atribuciones.

Que para el cumplimiento de su objeto, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango tendrá, entre otras funciones, la de proporcionar los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y ambulatorios de alta especialidad que determinen las disposiciones aplicables, así como aquéllos que autorice su Consejo interno relacionados con la salud, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

Que el Consejo interno tendrá, entre otras funciones, la de fijar las bases de los mínimos y máximos de las cuotas de recuperación y su actualización, por los servicios que preste el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.

Luego entonces, se observa que por los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y ambulatorios de alta especialidad que brinde el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, tendrá derecho a recibir cuotas de recuperación, mismas que deberán estar fundadas en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, siendo su Consejo interno quien fije las bases de los mínimos y máximos de aquéllas, por lo que se presume que se pueden generar ciertos cobros.

Además de que el Sujeto Obligado debe reflejar la información que es de interés del Particular en la cuenta pública, tan es así que se localizó la del año dos mil veinte en la que se observa lo siguiente:



Atento a lo anterior, resulta claro que existe fuente obligacional que constriñe al Sujeto Obligado, a contar con la información solicitada, por lo que deberá proporcionar los documentos de los que se desprenda lo que el Particular solicitó, ello en virtud de que conforme al artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, quienes genere, **recopilen, administren, manejen, procesen archiven o conserven** información pública serán responsables de la misma, por lo que la justificante del Sujeto Obligado de que no puede proporcionar la información por no haber sido el quien la generó en un principio, resulta incorrecta ya que al poseerla en sus archivos, tiene la obligación de proporcionarla al ser del interés de los particulares.

Aunado a lo anterior, se consultó el Manual General de Organización del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, el cual identifica con la clave 208C0401000500S a la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género, que tiene dentro de sus funciones la de tramitar ante las autoridades competentes, la recuperación de documentos por cobrar, cuentas por cobrar y otros créditos de naturaleza análoga en los que se hayan agotado los procedimientos prácticos o extrajudiciales, conforme a lo estipulado en la legislación vigente en la materia, en ese sentido se observa que se pronunció la unidad que pudiera contar con lo solicitado, tan es así que manifestó que la información se encontraba clasificada como reservada; por tal razón, es necesario señalar que el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que, **ante la negativa de acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que encuentra en alguna de las excepciones establecidas en la normatividad aplicable.**

En ese sentido, según Trujillo, Humberto (2019), en el “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (p. 201), **la negativa de acceso a la información** ocurre cuanto de manera fundada y motivada, una autoridad la niega o la limita, por alguna de las siguientes razones:

* **La inexistencia de la información (p. 171):** Sucede cuando la información solicitada no se encuentra en los archivos públicos o clasificados de los entes sujetos a las Leyes de Transparencia.
* **La incompetencia del Sujeto Obligado (p. 171):** Ocurre cuando el Sujeto Obligado carece de atribuciones para poseer la información peticionada.
* **La clasificación de la información (p. 70):** Es el proceso o conjunto de acciones que realizan los sujetos obligados para establecer que determinada información se encuentra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad establecidos en la legislación en materia de transparencia.

Conforme a lo anterior, es de señalar que las excepciones al derecho de acceso a la información, consisten en que **la documentación sea inexistente, obre en los archivos, pero se encuentre clasificada, o bien, el Sujeto Obligado sea incompetente** para contar con esta; esto es, la negativa de acceso a la información, recae cuando la documentación no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, o bien exista, pero no pueda proporcionarse por contener datos **confidenciales o reservados.**

En ese contexto, en los artículos 100, 103 y 105 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los diversos 122, 128 y 130 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se prevé que **la clasificación** es el proceso mediante el cual los sujetos obligados determinan que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. Además, que dichos entes deberán aplicar de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información, por lo que, tendrán que acreditar la procedencia.

Por lo cual, en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, una de las formalidades a la cuales está sujeto el procedimiento de acceso a la información pública, es que **el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión;** además, deberá motivar la confirmación de dicha situación, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que en el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

En ese contexto, de la interpretación del artículo 108 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se logra observar que la clasificación depende del contenido de los documentos, pues de su análisis se establece si corresponde a una clasificación total o parcial.

En otro orden de ideas, la clasificación como reservada o confidencial, en materia de transparencia y acceso a la información, va tendiente al contenido de los documentos, sin tomar en cuenta otras situaciones como la localización o ubicación de los archivos, pues su fin es proteger la información contenida en estos.

Aunado a lo anterior, según Bonifaz, Leticia (2016), en la “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Comentada” (p. 342), la **clasificación de la información**, ocurre cuando la autoridad niega el acceso a esta, por ser confidencial o reservada, para lo cual, los sujetos obligados, deberán realizar el proceso de clasificación, a la luz de los principios y disposiciones establecidas en las Leyes de Transparencia, fundando y motivando, **de manera adecuada la negativa de información.**

Además, conforme al artículo 108, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y el Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas –Lineamientos Generales-, los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos o expedientes; por lo que, la clasificación de información se llevará a cabo mediante un **análisis caso por caso.**

Sobre lo anterior, el artículo 131 de la Ley referida, así como el Quinto de los Lineamientos Generales, establecen que los sujetos obligados **deberán fundar y motivar** debidamente la clasificación de la información.

Al respecto, el Octavo de los Lineamientos Generales, precisa lo siguiente:

* **Para fundar la clasificación** de la información se deberán señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la Ley aplicable;
* **Para motivar la clasificación** se deberán indicar las razones y circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada; la cual, en el caso de que se trate de información reservada, la motivación, deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de un determinado plazo de reserva.

Lo anterior, toma sustento en la fracción VII, del artículo 1.8, del Código Administrativo del Estado de México, que establece que todo acto administrativo, debe estar fundado y motivado, esto es, que contenga con precisión, los preceptos legales aplicables, las circunstancias generales o especiales, razones particulares y causas que se hayan tomado en cuenta para la emisión del mismo; asimismo, se trae cita por analogía la Tesis aislada número I. 4o. P. 56 P, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, (p. 450), que establece lo siguiente:

***“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE.*** *La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.”*

Conforme a lo anterior, se advierte lo siguiente:

* **Fundamentación:** Obligación de la autoridad que emite un acto, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye para la determinación tomada.
* **Motivación:** Razonamientos lógico-jurídicos sobre porque se consideró en el caso en concreto, que se ajusta a la hipótesis normativa.

Situación que toma relevancia, pues conforme al artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dentro de las atribuciones del comité de Transparencia está la de confirmar, modificar o revocar determinaciones que en materia de clasificación de la información.

Una vez establecido lo anterior, ya que el Sujeto Obligado manifestó que la información solicitada se encontraba reservada, se procede a realizar el siguiente análisis; el artículo 132 de la Ley de la materia, y el Séptimo de los Lineamientos previamente referido, prevé que la clasificación de la información se llevará a cabo, entre otros, en el momento en que se reciba la solicitud de acceso a la información pública. Por su parte, el Octavo de dichos Lineamientos, establece que, para fundar la clasificación de la información, se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o número de la ley o tratado internacional, en donde se le otorgue el carácter de reservada o confidencial a la información.

Por otra parte, dentro del acuerdo de clasificación el Sujeto Obligado aunque como ya se refirió no se emitió para atender la solicitud que dio origen al presente Recurso, señaló que la información sería clasificada como reservada con fundamento en el artículo 140, fracciones IV, VI y X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, (homólogo al artículo 113, fracción V VII y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública), precisa lo siguiente:

***“Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*I a III…*

*IV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

*V…*

*VI. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

*VII a IX…*

*X. El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;*

*XI…”*

Por su parte, en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se prevé lo siguiente:

***“Vigésimo tercero.*** *Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.”*

***…***

***Vigésimo sexto****. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.*

*Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:*

*I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;*

*II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y*

*III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.*

…

***Trigésimo.****De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:*

*I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y*

*II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.*

De la normatividad citada, se desprende que el supuesto de clasificación invocado por lo que hace a la fracción IV, se desprende que para clasificar la información como reservada, será necesario **acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud**, situación que no se encuentra acreditada en el Acuerdo remitido en respuesta

Por lo que hace a la fracción VI y X del artículo 140, de la Ley de la materia en estudio no se advierte que dichos datos se encuentren en un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite o en un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional o bien, que den cuenta de este, ni mucho menos sobre si la publicación de la información cause algún daño ya que el Sujeto Obligado en ningún momento proporciono algún número de expediente que dé cuenta de algún proceso que se encuentre en trámite, por lo que no se advierte algún razonamiento que dé cuenta que la clasificación de la información encuadre en alguno de estos supuestos.

Por tal razón se trae a colación el artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, como el Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos o expedientes; por lo que, la clasificación de información se llevará a cabo mediante un análisis caso por caso.

Además, el artículo 132 de la Ley de la materia ya señalada, y el Séptimo de los Lineamientos previamente referido, prevé que la clasificación de la información se llevará a cabo, entre otros, en el momento en que se reciba la solicitud de acceso a la información pública. Por su parte, el Octavo de dichos Lineamientos, establece que, para fundar la clasificación de la información, se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o número de la ley o tratado internacional, en donde se le otorgue el carácter de reservada o confidencial a la información.

Es por lo señalado, que dentro del acuerdo de clasificación el Sujeto Obligado se observa que no corresponde a la solicitud que dio origen al presente Recurso de Revisión 01531/INFOEM/IP/RR/2024, ya que atiende otra solicitud y el Acuerdo remitido no se encuentra debidamente acreditada la reserva de la información, por lo que no aporta mayores elementos para especificar un riesgo real demostrable e identificable, así no se encuentra acreditada la prueba de daño por el Sujeto Obligado, situación que se robustece con lo señalado en la Tesis Aislada número I.10o.A.79 A (10a.), (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, pag. 2318) como se muestra a continuación:

***PRUEBA DE DAÑO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL SUJETO OBLIGADO APORTE.***

*De acuerdo con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los lineamientos segundo, fracción XIII y trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta. Para tal efecto, disponen que en la clasificación de la información pública (como reservada o confidencial), debe justificarse que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Así, la prueba de daño establece líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de índole estatal o particular. Por tanto, al tratarse de un aspecto constreñido al ámbito argumentativo****, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los términos señalados.***

De lo anterior, se desprende que la información reservada, es aquella que, cuando de manera excepcional y por razones de interés público, su publicidad puede causar un daño al interés jurídico tutelado por la Ley, en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 140 de la Ley de la materia, y **desarrollar la prueba de daño, misma que será caso por caso**, ya que no se podrá clasificar la información únicamente por estar vinculada con los supuestos establecidos en la Ley sino que además se demostrara que efectivamente dar a conocer la información que se clasifica podría afectar las funciones y el actuar de los diversos sujetos obligados .

Dicha prueba de daño, consiste en exponer los argumentos y razones, basados en elementos verificables, a partir de los cuales se derive que la divulgación de información, en particular, puede afectar, poner en riesgo o dañar el interés protegido. Asimismo, esta no debe basarse en meras especulaciones o suposiciones, sino en elementos objetivos que deban evaluar que existe un riego actual e inminente.

Por lo señalado, es que el Sujeto Obligado no realizó de manera adecuada la clasificación de la información ya que, si bien en el Acuerdo que adjuntó se clasificó como información reservada la relacionada con pagarés de cuentas por cobrar que tenga la unidad jurídica, no especifica si incluye la temporalidad requerida en la presente solicitud 00055/HRZUM/IP/2024, además de que en dicho acuerdo señaló que la información se encontraba clasificada por las fracciones IV, VI y X del artículo 140 de la Ley de la materia, sin embargo, no analiza cada fracción de manera específica, para acreditar cada uno de los elementos establecidos en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas y como ya se estableció debe desarrollar la prueba de daño caso por caso y no motivo de manera adecuada cual es el riesgo real demostrable e identificable que generaría entregar la información.

Ahora bien, es de señalar que adicional a que no se acreditó ni la reserva ni la prueba de daño de los títulos de crédito, es de precisar que, la propia naturaleza de los títulos de crédito es la libre circulación, pues justamente estos pueden pasarse de persona a persona, con el objetivo de que se cubra en monto establecido en el título de crédito, en cuyo caso el acreedor cambia de persona y el deudor, mantiene en adeudo establecido ante el nuevo acreedor; lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 3°, 5°, 7°, 18, 21 y 170 la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, misma que establece los requisitos de los títulos de crédito, los casos en que opera la libre circulación y los requisitos que debe cubrir cada tipo de documento, como es el caso de los pagarés, de tal suerte que de la interpretación sistemática de los artículos antes referidos en relación con el artículo 140 de la Ley de Transparencia del Estado, no es posible desprender que dichos documentos actualicen algún supuesto de reserva.

Por tal motivo, se advierte que los mismos, pueden ser entregados en su caso en versión pública, pues como título de crédito, en los casos de la libre circulación, cualquier persona podría adquirirlo por endoso y para ello, es necesario que el Sujeto Obligado haga del conocimiento público los títulos de crédito que tiene a su favor, pues al tratarse de recursos que deben ingresar a las arcas públicas e, el objetivo primordial debe ser recuperar el dinero a través del cobro del título de crédito del deudor o a través de su transmisión.

Aunado a lo anterior, dentro de las manifestaciones realizadas, señaló que la información contenía datos personales de los usuarios del Hospital como nombre, dirección teléfonos particulares; sin embargo, eso no es impedimento a entregar ya que se puede generar una versión pública. En efecto, cuando el mero objetivo de la entrega de la información sea conocer los títulos de crédito que tiene a su favor el Hospital y no así su transmisión como título de crédito, atentos al principio de finalidad, procede analizar aquellos datos que no son necesario para la transparencia y rendición de cuentas y, por el contrario, su entrega podría suponer una invasión a la privacidad del deudor como los datos de contacto y ubicación, por lo que procede analizarlos. Al respecto sobre esta se precisa que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 116, dispone que se considera información confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

De la misma manera, el artículo 5°, fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, prevé que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública; no obstante, aquella referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, será protegida a través de un marco jurídico rígido, de tratamiento y manejo de datos personales.

Por su parte, el artículo 24, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, precisa que los Sujetos Obligados serán los responsables de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. En concordancia con lo previo, el artículo 143, fracción I, de la Ley previamente citada, establece que la información privada y los datos personales, concernientes a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable son confidenciales.

Asimismo, en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé que para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, ii) por ley tenga el carácter de pública, iii) exista una orden judicial, iv) por razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger los derechos de terceros o cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren confidenciales, serán una limitante del derecho de acceso a la información, siempre y cuando:

1. Se trate de datos personales o información privada; esto es, información concerniente a una persona física o jurídico colectiva y que ésta sea identificada o identificable.
2. Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.

En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 3°, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con relación el diverso 4°, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se advierte que son datos personales, la información concerniente a una persona física identificada o identificable (cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico), establecida en cualquier formato o modalidad.

Además, en el artículo 5° de dicho ordenamiento jurídico, establece que es la Ley aplicable para todo tratamiento de datos personales.

Por su parte, los artículos 6°, 7°, 8° y 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, disponen que los responsables del tratamiento de datos personales, deben observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad; además, que dicho tratamiento deberá obedecer exclusivamente a sus atribuciones legales y con el consentimiento de su titular, además de que debe estar justificado en ley (principio de finalidad).

Ante tales situaciones, un dato personal es cualquier información que pueda hacer a una persona física identificada e identificable, como su nombre o imagen. Asimismo, la doctrina desarrollada a nivel internacional, respecto del tema de datos personales, establece que también las preferencias, gustos, cualidades, opiniones y creencias, constituyen datos personales. En este sentido, cualquier información que por sí sola o relacionada con otra permita hacer identificable a una persona, es un dato personal, susceptible de ser clasificado.

En este contexto, la confidencialidad de los datos personales tiene por objetivo establecer el límite del derecho de acceso a la información a partir del derecho a la intimidad y la vida privada de los individuos. Sobre la particular, el legislador realizó un análisis en donde se ponderaban dos derechos: el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales versus el interés público de conocer el ejercicio de atribuciones y de recursos públicos de las instituciones y es a partir de ahí, en donde las instituciones públicas deben determinar la publicidad de su información.

De tal suerte, las instituciones públicas tienen la doble responsabilidad, por un lado, de proteger los datos personales y por otro, darles publicidad cuando la relevancia de esos datos sea de interés público.

En este orden de ideas, toda la información que transparente la gestión pública, favorezca la rendición de cuentas y contribuya a la democratización del Estado Mexicano es, sin excepción, de naturaleza pública; tal es el caso, la entrega de recursos públicos bajo cualquier esquema, el cumplimiento de requisitos legales.

Dada la complejidad de la información cuando involucra datos personales, pudiera pensarse que se trata de dos derechos en colisión; por un lado, la garantía individual de conocer sobre el ejercicio de atribuciones de servidores públicos así como de recursos públicos y, por el otro, el derecho de las personas a la autodeterminación informativa y el derecho a la vida privada; tratándose de los datos personales que obran en los archivos de las instituciones públicas, la regla es clara, ya que los datos personales que permiten verificar el desempeño de los servidores públicos y el cumplimiento de obligaciones legales, transparentan la gestión pública y favorecen la rendición de cuentas, constituyen información de naturaleza pública, en razón de que el beneficio de su publicidad es mayor que el beneficio de su clasificación, aun tratándose de información personal.

En consecuencia, aquellos datos que únicamente versan sobre la vida privada de las personas deberán ser eliminadas de las versiones pública, previa aprobación del Comité de Transparencia, tales como domicilio, teléfono y cualquier dato que los haga ubicables, sin la posibilidad de poder clasificar el nombre, dato que debe considerarse público, en virtud de que, al tener una deuda frente a la institución pública, el dato adquiere interés público y por ende no procede su clasificación, pues se encuentra directamente vinculado con el ejercicio de recursos públicos.

En efecto, para el caso del Hospital, los pagarés se generan con motivo de la atención médica que se ofrece, sin que se cubra el costo del servicio al momento, pues se entiende que ante la relevancia de un accidente o emergencia médica, el Hospital brinde servicios a quien no es derechohabiente y se genere un monto que no pueda ser cubierto al momento del alta del paciente.

Ahora, sobre el **punto 2** mencionado en el Considerando TERCERO relacionado en saber si hay servidores públicos con títulos de crédito o adeudos con el Hospital en enero de dos mil veinticuatro, por lo que en respuesta la Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género, señaló que no contaba con la información solicitada por no encontrarse dentro de sus funciones, posteriormente en informe justificado el Director de Administración y Finanzas manifestó que la solicitud, tendría que ser referida a la Subdirección de Personal.

No obstante, en el Manual General de Organización del Sujeto Obligado se observa que la Subdirección de Personal depende jerárquicamente de la Dirección de administración y Finanzas, sin embargo, esta última aceptó no haber turnado a dicha unidad. No se omite mencionar que, la propia naturaleza de los títulos de crédito, principalmente aquellos que constituyen adeudos en favor de las instituciones públicas en su calidad de acreedor, no es parte de la cotidianidad del trabajo de los servidores públicos; esto es, no existe normatividad que disponga o que obligue a los servidores públicos a expedir pagarés o cualquier otro tipo de título de crédito en favor de una institución pública. Ahora bien, la persona Recurrente solicita saber todos los adeudos que tengan servidores públicos con el Hospital, por lo que se entiende que se refiere a cualquier adeudo adicional a la prestación de servicios médicos, incluidos aquellos determinados ante una eventual responsabilidad administrativa, en donde los montos adeudados se cubren a través de procedimientos resarcitorios, los que una vez que han quedado firmes constituyen un adeudo para el servidor público, por lo que estos también deberán ser entregados.

Sin embargo, como se advierte, no hay una respuesta del servidor Público Habilitado competente, por lo que no hay certeza si cuenta o no con lo solicitado ya que no siguió de manera cabal el procedimiento de búsqueda **para localizar la información**, el cual se encuentra previsto en los artículos 160 y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que es el siguiente:

1. Las Unidades de Transparencia garantizarán que las solicitudes de acceso a la información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla -de acuerdo a las facultades, competencias y funciones-, con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida, y
2. Los sujetos obligados otorgaran acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes.

Conforme a la anterior, el Ente Recurrido deberá realizar una búsqueda correcta de la información en las unidades que conforman la Dirección de Administración y Finanzas y en todo caso de proporcionar los documentos de los que se desprenda lo que el Particular solicitó, ello en virtud de que conforme al artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los sujetos obligados están constreñidos a proporcionar la información pública que obre en sus archivos, en el estado en que esta se encuentre; por lo que, la entrega no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante, además, que tampoco deberá generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones, ya que los sujetos obligados únicamente están constreñidos a proporcionar la documentación que obre en sus archivos; por lo que, no están obligados a generar o elaborar documentos *Ad hoc.*

En este sentido, en el caso de que existan documentos que permitan identificar la existencia de adeudos a través de títulos de crédito, se deberá entregar la versión pública en los términos expuestos en el punto anterior.

**SEXTO. Decisión**

Con fundamento en el artículo 186, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Instituto considera procedente **REVOCAR** y **MODIFICAR** respectivamente las respuestas otorgadas por el Sujeto Obligado a las solicitudes de información **00055/HRZUM/IP/2024 y 00061/HRZUM/IP/2024**, por resultar parcialmente fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el Recurrente, en los Recursos de Revisión **01531/INFOEM/IP/RR/2024 y 01532/INFOEM/IP/RR/2024**, en consecuencia procede **ORDENAR**, conceda en su caso en versión pública a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), los documentos solicitados.

**Términos de la Resolución para el Recurrente**

Este Instituto, determinó ordenar al Hospital la entrega de la información de los títulos de crédito en donde se eliminen los datos confidenciales de los deudores y en su caso, le entregue el documento que permita identificar si las personas que firmaron pagarés lo hicieron en calidad de servidores públicos.

La labor del INFOEM, es apoyar a la población para acceder a la información pública y garantizar la protección de sus datos personales.

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **REVOCA** la respuesta entregada por el **Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango** a la solicitud de información **00055/HRZUM/IP/2024 y** se **MODIFICA** la respuesta entregada a la solicitud de información **00061/HRZUM/IP/2024**, por resultar fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el Recurrente, en los Recursos de Revisión **01531/INFOEM/IP/RR/2024 y 01532/INFOEM/IP/RR/2024**, en términos de los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango**, a efecto de que, previa búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de sus áreas competentes, remita, a través del SAIMEX, de ser procedente en versión pública, los documentos en donde conste lo siguiente:

1. Títulos de crédito y/o cuentas por cobrar que tenga del año dos mil diecinueve.
2. Los títulos de crédito y/o adeudos que tengan servidores públicos, en enero de dos mil veinticuatro.

De ser necesarias las versiones públicas, se deberá proporcionar el Acuerdo de Clasificación donde el Comité de Transparencia, confirme la eliminación de los datos confidenciales, de conformidad con los artículos 49, fracciones II y VIII, 132, fracción II y 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Para el caso de que no cuente con la información que se ordena entregar en el punto 2 por no haberse generado, deberá de hacerlo de conocimiento del Particular de manera clara y precisa.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE POR SAIMEX** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186, último párrafo, 189, segundo párrafo, y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III, 214, 215 y 216 de la Ley referida.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de la materia, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**CUARTO. NOTIFÍQUESE POR SAIMEX** al Recurrente la presente Resolución, asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR **MAYORÍA** DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA CON VOTO DISIDENTE, EN LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.